

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ
DEMANDADO	PORVENIR S.A.
PROCEDENCIA	JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-010-2018-00452-01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN DEMANDANTE
TEMAS Y SUBTEMAS	- PENSIÓN SOBREVIVIENTES - DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES
DECISIÓN	REVOCA

SENTENCIA No.010

Medellín, treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N°002 de 2023, se procede a dictar SENTENCIA en orden a resolver el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la **DEMANDANTE** contra la Sentencia No. 310 del 29 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

La señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ** presentó demanda ordinaria laboral en contra de **PORVENIR S.A.** con el fin de que, en su calidad de madre del afiliado fallecido Anderson Johan Arenas Sánchez: 1) Se le reconozca pensión de sobrevivientes a partir del 4 de noviembre de 2017. 2) Así mismo peticionó el pago de intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, o en subsidio, la indexación de las sumas resultantes.

Fundamentó las pretensiones en que, era la progenitora de Anderson Johan Arenas Sánchez, procreado dentro de la unión marital sostenida con el señor Gustavo Adolfo Arenas Castillo. Que su hijo falleció el 4 de noviembre de 2017 en accidente de tránsito, época en la que vivía bajo el mismo techo junto a ella. Que el afiliado en comento laboraba desde el mes de diciembre de 2014 en la empresa Industrias Haceb, devengando al momento del deceso la suma de \$865.824, al igual que registraba afiliación en pensiones a la **AFP PORVENIR S.A.**

Afirmó la demandante que dependía económicamente su hijo, cuestión que no predica en esos mismos términos del padre de aquel, de quien dijo, no vivía con ellos en ese momento. En tal sentido, indicó que su hijo era quien cubría sus necesidades básicas, aportándole una

suma dineraria cada 10 días que recibía el salario. Que ante el fallecimiento de su descendiente ha visto afectada su congrua subsistencia debido a la falta del aporte de aquel, que era esencial y necesario para su sostenimiento y llevar una vida en condiciones mínimas, en atención a que, además de no contar con inmuebles, no recibir pensión, y vivir en casa arrendada, solo percibe un ingreso que asciende a un (1) salario mínimo, por sus labores como auxiliar de servicios generales.

Que, si bien el causante convivió con Dalis Romero Méndez, esta relación inició en febrero de 2016 y culminó en el mes de enero de 2017, tiempo durante el cual no dejó de ofrecerle colaboración a la demandante de manera periódica e ininterrumpida, retornando posteriormente al hogar de su progenitora.

Que, por lo anterior, el 23 de enero de 2018 solicitó a **PORVENIR S.A.** el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, misma que fue negada por esa entidad en oficio del 14 de marzo de 2018, tras concluir que no estaba acreditada la dependencia económica del fallecido (f. 3 a 13 Archivo 03 ED).

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La demandada **PORVENIR S.A.** dio contestación al gestor, oponiéndose a las pretensiones de la demanda, sosteniendo, en síntesis, que no se acredita la dependencia económica que demandaba la actora de su hijo fallecido. En consecuencia, la entidad formuló las excepciones de “(...) *FALTA DE CAUSA PARA PEDIR; INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS; BUENA FE; PRESCRIPCIÓN e IMPOSIBILIDAD DE CONDENA AL PAGO DE INTERESES MORATORIOS* (...)” (f. 69 a 83 Archivo 03 ED).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, mediante Sentencia No. 310 del 29 de noviembre de 2021, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, dispuso:

“(...) 1. DECLARAR que el señor ANDERSON JOHAN ARENAS SÁNCHEZ identificado en vida con la C.C. 1.128.474.313 dejó causada la pensión de sobrevivientes, de conformidad con los argumentos expresados en la parte motiva.

2. DECLARAR que la señora ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ identificada con la C.C. 43.563.248 no acredita los requisitos de Ley 797 de 2003, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes demandada. En consecuencia, se absuelve a la AFP PORVENIR S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra por la nombrada demandante, de conformidad con lo expresado en precedencia.

3. Las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada, han quedado implícitamente decididas con las consideraciones vertidas en esta sentencia sin encontrar prosperidad, salvo la INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA, de conformidad con lo expresado en precedencia. (...)”.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la apoderada de la **DEMANDANTE** apeló arguyendo en primer lugar, que el joven Anderson Arenas acreditó más de las 50 semanas de cotización exigidas durante los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento, para dejar causada la pensión.

Frente a la dependencia económica arguye que, al tenor de la Sentencia C-111 de 2006, no cabe exigir que aquella sea total o absoluta, señalando que, el fallo recurrido tuvo como referencia la información diligenciada en el formulario de reclamación de la pensión de sobrevivientes, sobre lo cual se afirmó por el Despacho que los ingresos familiares mensuales ascendían a la suma de \$3.500.000, al considerarse inconcebible por el fallador

de primera instancia, que el compañero permanente de la actora no brindase ningún aporte económico al seno familiar, siendo quien percibía los mayores ingresos en el hogar.

Frente a esta posición señaló la apoderada, que si bien es sería el deber ser, ya que todas las personas que conforman un grupo familiar deben aportar económicamente para elevar el nivel de vida de quienes lo integran, en esta clase de sucesos se deben analizar las particularidades del caso, como las aquí expuestas y probadas, en tanto no se trata de definir el deber ser, pues no se ajusta a este el hecho de que el señor John Jairo - compañero permanente de la actora - tuviera una adicción al juego (maquinitas), que lo llevaba a dilapidar su salario, en tanto lo correcto sería que cumpliera con un aporte significativo a su hogar conformado con la accionante desde hacía 19 años, aunado a que este tampoco dejó de brindarle ayuda económica a su antigua esposa, dado que aquella no trabajaba.

Que, para la época del deceso del afiliado, la actora devengaba un salario mínimo, mientras que su hijo percibía \$855.000 mensuales, de los cuales le entregaba a la primera la suma de \$300.000, apoyo que se tornó necesario, indispensable y relevante para el sostenimiento del hogar, con carácter periódico y no eventual. En este punto arguye que, los testigos fueron claros al expresar que el causante aportaba en su casa \$100.000 cada 10 días, cifra que, teniendo en cuenta el salario mínimo de la época (\$737.717), denota su relevancia, como quiera que la familia vivía en casa arrendada, pagando un canon de arrendamiento por \$550.000 mensuales, destinando la demandante la mitad del aporte de su hijo para este gasto, y utilizando lo restante en alimentación.

Continuó expresando que, no se muestra acertado aducir que después haber fallecido su hijo, la accionante continuó su vida en condiciones dignas, más aún cuando lo cierto es que su compañero permanente nunca atendió sus obligaciones, lo que es un hecho reprochable, reiterando que la colaboración del hijo fallecido era constante, periódica, indispensable, necesaria y sustancial. En consonancia con lo expuesto anotó que, la pareja de la demandante distribuía sus ingresos entre los estudios de su hija (\$300.000), el aporte para el hogar de su esposa (\$300.000), y el pago de sus deudas (\$300.000).

Por todo lo antelado reiteró que, sí existía dependencia económica de la señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ** para con su hijo, ajustada a la postura jurisprudencial antes mencionada, y a la contenida en Sentencia SL1527-2020.

ALEGATOS DE CONCLUSION

El apoderado de **PORVENIR S.A.** arguyó que la demandante no acreditó el elemento subjetivo de la dependencia económica respecto de su hijo fallecido, aunado a que esta percibía otros ingresos con los cuales contribuía al sostenimiento del hogar, sin que por el hecho de que el afiliado hubiere sido un buen hijo que colaborara con algunos gastos de su vida diaria cuando tuvo ingresos, estos no se muestran suficientes para crear una dependencia en los términos de la preceptiva vigente, como quiera que la reclamante tenía satisfechas sus necesidades básicas con base en la comunidad de aportes de su grupo familiar y sus propios ingresos derivados de su mesada pensional.

Tal situación evidencia que la ayuda del hijo se limitaba a una mera colaboración, conforme lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Así mismo, indicó que los testigos escuchados no fueron consecuentes con sus dichos, en la medida en que expusieron aspectos muy generales, demostrando poco conocimiento de los hechos (Archivo 04 ED Tribunal).

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el presente asunto se circunscribe a establecer si la señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ** en su condición de madre del causante, acreditó la

dependencia económica respecto de su hijo **ANDERSON JOHAN ARENAS SÁNCHEZ**, y, en consecuencia, si puede tenerse como beneficiaria de la pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento de aquel, según lo sostiene la apelante – activa; o por el contrario, si como lo concluyó el *a-quo*, no se demostró que el aporte realizado por el causante al grupo familiar de la accionante, tuviera la relevancia necesaria para determinar la dependencia económica requerida para causar el derecho en favor de su progenitora.

De salir adelante lo anterior, deberá revisarse, además, si hay lugar a condenar a la pasiva por concepto de intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993

Se procede entonces a resolver los planteamientos, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo normado en el artículo 66A CPT y SS la decisión de esta instancia se circunscribe a los asuntos materia del recurso de apelación, restricción a la competencia funcional del fallador de segundo grado, que impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en la alzada (SL 2808-2018), con la salvedad hecha para los derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador (SL8613-2017 y SL12869-2017), según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003.

Para comenzar, se precisa que no son objeto de debate los siguientes supuestos fácticos:

- (i) Que la señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ** es la madre del afiliado fallecido de **ANDERSON JOHAN ARENAS SÁNCHEZ**, según muestra el Registro Civil de Nacimiento militante a folio 14 Archivo 03 ED.
- (ii) Que el joven **ANDERSON JOHAN ARENAS SÁNCHEZ** desplegaba actividad laboral y se encontraba afiliado en pensiones a la **AFP PORVENIR S.A.** (f. 19 a 23 Archivo 03 ED)
- (iii) Que el afiliado en comento falleció el **4 de noviembre de 2017**, tal como se desprende del Registro Civil de Defunción visible a folio 16 Archivo 03 ED.
- (iv) Que el 23 de enero de 2018, la señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ** solicitó a **PORVENIR S.A.** el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en condición de madre del fallecido, petición negada por esta entidad en comunicación del 14 de marzo de 2018, tras concluir que la solicitante no acreditó la dependencia económica respecto de su hijo (f. 94 a 97 Archivo 03 ED).

DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES -

De conformidad con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 9762-2016, SL 9763-2016, SL 1689-2017, SL 1090-2017, SL 2147-2017 y 3769-2018, entre otras, la norma que gobierna el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes es la vigente al momento del óbito del pensionado o afiliado, de modo que la disposición legal aplicable al caso que nos ocupa es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, por encontrarse vigente al **4 de noviembre de 2017** (f. 16 Archivo 03 ED), fecha del fallecimiento de **ANDERSON JOHAN ARENAS SÁNCHEZ**.

Para el fin en comento, dicha normativa plantea como exigencias, que el afiliado hubiere cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento.

De igual forma, el artículo 74 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, respecto a los beneficiarios del causante, dispone en su literal **d)**, que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, **serán beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, los padres del causante si dependían económicamente de este**.

Sobre el primero de los requisitos, es importante destacar que dentro de la discusión trazada en esta instancia, no es materia de debate que el afiliado fallecido ARENAS SÁNCHEZ dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos descritos, pues la parte accionada dentro del escrito de contestación de la demanda y en el recurso de alzada, no puso en discusión que el causante alcanzó la densidad de semanas requeridas para dejar derecho a la pensión de sobrevivientes, circunscribiendo la disyuntiva a la falta de acreditación de la dependencia económica de la señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ** respecto de su hijo fallecido.

Ahora, en punto al vínculo de consanguinidad entre la demandante y el causante, el mismo está acreditado con el Registro Civil de Nacimiento visible a folio 14 Archivo 03 ED.

Así, el tema objeto de controversia gravita alrededor de la **dependencia económica** exigida por la ley para el progenitor respecto del hijo, afiliado o pensionado fallecido, aspecto que insiste la accionante, quedó acreditado con las pruebas recaudadas a lo largo del proceso, y que replica la demandada, no fue así, aseverando que el aporte que realizaba el hijo a su progenitora no configura la dependencia económica de esta respecto de su descendiente.

En cuanto a la citada dependencia requerida a los padres en relación con sus hijos, como lo dijo la Juez de instancia, al estudiar la constitucionalidad de la norma evocada, en Sentencia C-111 de 2006, el Máximo Tribunal Constitucional precisó lo siguiente:

“(…) la falta de condiciones materiales que les permitan a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, entendida ésta, en términos reales y no con asignaciones o recursos meramente formales. De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta (…)”.

En sustancial armonía con lo anterior, la jurisprudencia especializada laboral ha considerado que la dependencia en comento **no debe ser total o absoluta, indicando que si bien debe existir una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, tal situación no excluye que aquellos puedan percibir rentas o ingresos adicionales, con la condición de que estos no sean suficientes para garantizar su independencia económica, es decir, que esas rentas no alcancen a cubrir los costos de su propia vida**, criterio señalado en sentencias como la **SL400-2013**, **SL6390-2016** y la SL4977-2020 en la cual expuso:

“(…) tiene dicho esta Corporación, como la recurrente acepta, que la dependencia económica de los padres no tiene que ser total y absoluta, de suerte que si ella manifiesta que genera algún ingreso no por ello se torna improcedente el reconocimiento de la prestación en su favor, porque la protección que esta pensión entraña es para procurarle una vida digna, pues una casa propia y un trabajo informal y eventual no representan autonomía. (…)”.

También tiene adoctrinado el precedente que no cualquier ayuda proporcionada a los padres tiene la virtualidad de configurar la dependencia requerida, pues la misma debe estructurarse en aspectos como:

“(…) i) la falta de autosuficiencia económica, a partir de recursos propios o de terceros y ii) una relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital en un grado significativo (…)”,

En esas condiciones, la ayuda proporcionada en vida por el afiliado fallecido debe responder a las características de ser **relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento del beneficiado**.

Visto lo anterior, el Juez de primer grado fundamentó su decisión en que al quedar evidenciado que tanto la demandante como su compañero permanente actual tienen un empleo con cierta antigüedad, a los cuales, se suma el conjunto de ingresos de los demás integrantes de la familia reportados en el formulario de solicitud de la pensión de sobrevivientes, arrojan un aproximado de \$3.500.000 mensuales, suma de la que, el aporte del causante de \$300.000 mensuales no representaba ni el 10%.

Así mismo, el funcionario fue crítico de la conducta del señor John Jairo Salazar, compañero de la actora, en lo que respecta a la asunción de obligaciones económicas mínimas de su parte al interior del hogar conformado con la accionante. Continuó exponiendo que, pese a estar probado que el aporte del fallecido era importante y significativo, este no alcanzaba a ser fundamental, en tanto lo aportado por la accionante y su pareja era superior.

Bajo el anterior contexto, analizará la Sala si de las pruebas practicadas en el curso procesal, es dable colegir la dependencia económica de la demandante respecto de su hijo fenecido, o, por el contrario, debe confirmarse la decisión analizada.

En ese sentido, lo primero a anotar es que reposan en el expediente declaraciones extra-proceso rendidas ante notario por Paula Andrea Álvarez Ocampo y Sebastián Velázquez Moncada (f. 41 a 44 Archivo 03 ED), quienes expusieron haber conocido de vista, trato y comunicación al causante, del que dijeron, vivía con su señora madre, **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ**, aportando para el sostenimiento del hogar, en especial para su progenitora, toda vez que el padre del causante no veló económicamente por ellos.

Precisamente, al estrado concurrió a rendir interrogatorio de parte la demandante (Min. 12:52 a 54:46 Archivo 18 ED), oportunidad en la que manifestó que labora hace 8 años como auxiliar de servicios generales en la empresa “UNO-A”, actividad remunerada con el salario mínimo legal. Que su núcleo familiar estaba conformado para el año 2017 por sus hijos, Anderson Johan, Sebastián Camilo y Karen Daniela, al igual que por el señor John Jairo Salazar, con quien convive en unión marital de hecho hace 19 años, el cual labora como vigilante al servicio de la CTA COTRASER.

Que para la época del deceso de su hijo Anderson, este laboraba en la empresa HACEB y percibía como salario la suma de \$850.000; su otra hija, Karen Daniela, era estudiante, siendo el causante quien pagaba la mensualidad y los útiles, y en colaboración con ella, le costeaban el transporte. Así mismo, expresó que Sebastián Camilo laboraba para ese momento en una panadería por días, lo que le permitía colaborar en la casa, cuando podía con \$50.000 aproximadamente. Que, a pesar de haber consignado en los formatos de reclamación de pensión, que este último ganaba el equivalente al salario mínimo, ello obedeció a que el asesor no le supo explicar bien lo que iba en esa casilla.

Anotó que, como al fallecido le pagaban el sueldo cada 10 días, en estas fechas le entregaba la suma de \$100.000, para un total de \$300.000 mensuales, dinero que indicó, destinaba una parte para el arriendo y otra para el mercado. En relación con su compañero

permanente, señor John Jairo Salazar, explicó que en ese momento aquel no aportaba nada, como quiera que tenía otra familia a la que le colaboraba, principalmente a tres (3) de sus cuatro (4) hijos y nietos. Al indagársele sobre esta situación, afirmó que siempre vivió bien con su pareja, ya que en materia económica siempre ha trabajado, sosteniendo la casa junto a Anderson, aunque afirmó que en cierto momento le indicaron a su compañero que cuando tuviera los ayudara, aporte del que dijo, no era constante.

La interrogada aclaró que por un tiempo su hijo fallecido convivió con Dalis Andrea Romero, su pareja por espacio de 11 meses, tiempo en el que continuó apoyándola, aunque disminuyó su colaboración, pero al cabo de ese periodo, regresó a vivir al hogar materno. En cuanto a los gastos del hogar asevera que, el arriendo ascendía a \$550.000, suma que pagaba con una parte de lo que le daba su hijo; añade que, en las ocasiones que su compañero aportaba, lo destinaba para el pago de los servicios públicos.

De igual forma, fueron recepcionadas las declaraciones de **PAULA ANDREA ÁLVAREZ OCAMPO** (Min. 01:30 a 58:50 Archivo 19 ED), **JOHN JAIRO SALAZAR GRANADA** (Min. 01:02:00 a 1:45:40 Archivo 19 ED), y **SEBASTIÁN CAMILO ARENAS SÁNCHEZ** (Min. 01:47:30 a 2:09:54 Archivo 19 ED). La primera informó haber conocido a la demandante 6 años atrás, en razón a que sostenía una relación sentimental con un sobrino de aquella, visitándola muy a menudo durante los primeros años en comento. Por esta circunstancia refirió conocer que el hogar de la actora estaba conformado por sus 3 hijos y su pareja, y que la citada laboraba en oficios varios para la empresa “UNO-A” en donde ganaba un salario mínimo, desconociendo cual era el salario de su compañero, de quien dijo, era vigilante, pero tenía entendido que no aportaba a los gastos de la casa por tener compromisos con préstamos y otra familia.

Sobre las actividades de los hijos de la actora, explicó que el difunto Anderson Johan trabajaba en la empresa HACEB, Sebastián Camilo por su parte laboraba por días en una panadería, mientras que Karen Daniela permanecía en la casa y hacía cursos de belleza, estudios que, según dijo, eran solventados por su hermano fallecido y la demandante. Asumió que la reclamante destinaba todo su salario al sostenimiento del hogar, junto con su hijo Anderson Johan, toda vez que pagaban arriendo.

Afirmó la testigo que el causante convivió por espacio inferior a un año con Dalis Andrea, hogar en el compartían los gastos, momento en el que detalló que el primero percibía salarialmente un poco más del salario mínimo, tenía una moto, y pagaba un préstamo en el Banco de Bogotá, aparte de entregarle a su señora madre la suma de \$100.000 cada 10 días, cuestión que señaló conocer porque en ocasiones estaba ahí en la casa, y veía cuando le pasaba el dinero, ayuda que la misma accionante le comentó, era destinada a cubrir arriendo y mercado, condiciones que manifestó, cambiaron después de la muerte del afiliado, pues la reclamante comenzó a hacer préstamos para cubrir el vacío económico dejado a raíz de la muerte de su familiar, a lo que anotó que en 2018 o 2019 el otro hijo, Sebastián Camilo tuvo un trabajo más estable y comenzó a aportar, pero no sabe si en la misma cuantía que lo hacía el fallecido.

Por su parte, el declarante **JOHN JAIRO SALAZAR GRANADA**, compañero permanente de la demandante, refirió que convive con esta hace 20 años, pero antes lo hizo con quien aún está casado, la señora Flor Emilsen Úsuga, relación de la que procrearon 4 hijos, Yesenia, Sebastián, Julieth y Luisa Salazar. Que labora como vigilante, y para el año 2017 recibía un salario entre \$1.100.000 y \$1.200.000, recursos que destinaba a pagar créditos adquiridos, la colaboración a sus hijos dado que 3 de ellos permanecen en la casa con su progenitora y solo labora Sebastián, pero aclaró que este tiene problemas con el “vicio”.

Igualmente, expuso ayudarle a su hija Julieth con un curso de maquillaje y belleza, actividad para la que destinaba \$320.000 mensuales, además de los \$300.000 que dejaba para

el sostenimiento de ese hogar. Avanzada su declaración, expuso no aportar en el hogar conformado con la accionante, pues habían acordado esa condición, esto era, que ella velaba por sus hijos y él por los suyos. No obstante, adujo que daba entre \$50.000 o \$60.000 quincenales para la comida, y en ocasiones pagaba los servicios, reconociendo que tenía deudas por su inclinación al juego de las “maquinitas”. Que el otro hijo de la actora, Sebastián Camilo daba poquito para la casa, aproximadamente \$80.000 mensuales, producto de su servicio como ayudante en una panadería.

En cuanto al fallecido, señaló que tenía gastos, entre estos, la plata que le daba a su señora madre que eran \$100.000 cada 10 días, utilizados en el arriendo y mercado, lo que destinaba para sus salidas y el sostenimiento de la moto de su propiedad, toda vez que era una persona joven, añadiendo que tuvo una novia con la que vivió como 10 u 11 meses, periodo en el cual, pese a no vivir en la misma casa, continuaba apoyando económicamente a su mamá. Que, en su condición de compañero, “sacaba” a comer a la demandante, al igual que le daba, en caso de necesitar, chancas o zapatos.

Por último, fue escuchado el testigo **SEBASTIÁN CAMILO ARENAS SÁNCHEZ**, hijo de la demandante y hermano del *de cujus*, refirió que, para el año 2017 laboraba, aunque no de “lleno”, en una panadería en la que ganaba \$10.000 por turno, dinero del cual le entregaba una parte a la demandante, y el resto lo invertía en sus gastos. Que en múltiples ocasiones acompañaba a su hermano Anderson Johan a retirar el sueldo, y allí veía cuando le pasaba \$100.000 a la madre de ambos, indicando que era el fallecido con quien tenía una relación más cercana, de todos sus hermanos. Que este era dueño de una moto, pero no sabe si tuvo que endeudarse para comprarla, al paso que relató el tiempo en que su familiar convivió con su pareja en una casa distinta por un tiempo de 10 meses, sin dar más detalles. En ese sentido, expuso que, de hecho, el fallecido le colaboraba a la otra hermana de ambos para que estudiara, y que el dinero aportado por este se utilizaba para cubrir arriendo y comida. Adujo desconocer si el afiliado tenía deudas o estaba pagando un crédito.

En contraste con ello, como relevante de la probanza documental aportada, se resalta que, previo oficio ordenado por el Despacho de primer grado, la empresa Aseo Integrado S.A. – UNO A certificó que la señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ** laboró allí entre el 14 de diciembre de 1999 y el 14 de octubre de 2017, devengando el salario mínimo legal mensual vigente (Archivo 14 ED). Luego, la CTA COTRASER arrió constancia en la que aceptó que el señor John Jairo Salazar Granada está vinculado a esta entidad desde el 16 de julio de 2007, cumpliendo funciones de vigilancia y seguridad privada con una remuneración a corte del año 2017 de \$838.127 (Archivo 15 ED).

Visto entonces el caudal probatorio, puntualmente la testimonial recaudada, esto es, los relatos de **PAULA ANDREA ÁLVAREZ OCAMPO** y **JOHN JAIRO SALAZAR GRANADA**, se advierte a juicio de la Sala, que estos pusieron de presente circunstancias particulares de la forma como se desarrollaba, de un lado, la relación y ayuda prodigada por el afiliado fallecido a su señora madre, y de otro, la relación de pareja con el compañero de la demandante, aspecto considerado como singular por el Juez de primer grado, el cual fue preponderado a la hora de dictar el sentido de la decisión.

Frente a la primera situación, la testimonial referida es conteste y clara en sus manifestaciones, de acuerdo con la posición en que cada uno pudo captar los hechos por los cuales se les indagó (amiga y padrastro), en dejar expuesto el detalle de la colaboración o aporte efectuado por el señor Anderson Johan al hogar que conformaba junto a sus hermanos, padrastro, y, por supuesto, su señora madre, explicando que a partir de la regularidad nominal de la empresa en la que trabajaba, al recibir el pago de su salario, el hijo de la actora procedía a entregar a aquella cierta suma de dinero, que al mes alcanzaba los \$300.000, concordando los declarantes en relieves la importancia que tenía esta ayuda para la demandante, teniendo en cuenta que con esto cubría una fracción del arriendo de la casa habitada por la familia y parte del mercado, puesto que, los demás hijos de la citada, y hermanos del causante, no

contaban con la misma regularidad y estabilidad laboral, pues la joven Karen Daniela, no laboraba para la época, en tanto adelantaba estudios de estética capilar, los cuales, adujo la testigo **ÁLVAREZ OCAMPO**, en concordancia con la propia demandante al ser interrogada, eran costeados en gran medida por el difunto.

Luego, en lo concerniente a Sebastián Camilo Arenas Sánchez se dijo que, para la época del deceso de su familiar, hacía algunos turnos en una panadería, irregularidad que, indicó el testigo **SALAZAR GRANADA**, limitaba sus ingresos y el respectivo aporte para su familia, estando en la posibilidad de aportar al mes \$80.000 aproximadamente. Eso sí, hubo un esfuerzo de los deponentes por precisar que, después del fallecimiento del afiliado, su hermano comenzó a laborar con mayor regularidad en el establecimiento descrito, aumentando con ello su contribución en la casa.

En cuanto al desarrollo de la vida de pareja entre **JOHN JAIRO SALAZAR GRANADA** y la demandante, desde su interrogatorio, la demandante informó que este no aportaba mucho en términos económicos, pero que de esa forma habían vivido bien, llevando la obligación de su casa entre ella y su hijo fallecido. Ahora, al ser inquirido sobre esta situación, el principal implicado aclaró que esa forma de convivencia fue acordada con la propia demandante, en virtud de las demás obligaciones familiares y crediticias que este debía cubrir.

Ahora bien, nótese que lo señalado por los deponentes en comento, coincide en gran parte con lo relatado por la propia demandante al rendir su interrogatorio; no obstante, para la Sala sí se ofrece poco creíble la versión inicial de la actora acerca de no ofrecerse por el compañero, señor **SALAZAR GRANADA** ningún aporte para el grupo familiar del cual formaba parte con la demandante, en tanto el citado, al ser requerido por el Juzgado, informó que ayudaba con una suma, aunque mínima, para la comida, y para los servicios públicos cuando tenía posibilidad de hacerlo, denotando que su estancia en dicha casa no pasaba desapercibida en el aspecto económico, dado que, no se erige lógica su falta de contribución, de cara a palear las dificultades que en cuanto a fluidez de recursos, afrontaba el hogar.

En ese orden de ideas, al confrontar la evidencia anterior con el análisis efectuado por el Juez de instancia, encuentra la Sala que, en el camino a la decisión de fondo, este desvió su atención en varios aspectos que lo llevaron a considerar una determinación absolutoria, puesto que primero, estuvo centrado en los datos contenidos en el formulario de la solicitud de pensión, precisamente en el capítulo donde se consignan los ingresos de quienes integran el hogar del afiliado, en los que se detallaba lo siguiente:

Ingresos del núcleo familiar al momento del fallecimiento del afiliado(s)			
Descripción	Ingresos mensuales (\$)	Origen de los ingresos	Observaciones
Generados por la madre	781.242	SALARIO	
Generados por el padre			
Aportados por el afiliado	850.000	SALARIO	
Aportados por hermanos del afiliado	781.242	SALARIO	
Total	2.412.484		

MAX-17 F-01-BF-RC-36 V.2.0

A las cifras allí descritas, sumó el salario que dijo recibir el señor **JOHN JAIRO SALAZAR GRANADA**, y con base en estas cifras, ponderar el aporte del fallecido, que estimó como importante pero no fundamental, pese a que, conforme se extracta de las pruebas, la única que destinaba casi la totalidad de su salario para el hogar era la demandante.

El cálculo reseñado, observa la Colegiatura, dejó de lado las circunstancias particulares bajo las cuales se desarrollaba la vida del grupo familiar de la demandante, y el compromiso que cada integrante asumía desde el ámbito económico, en la medida en que no tuvo en cuenta, por ejemplo, la informalidad y falta de continuidad que para ese momento revelaba la vinculación laboral del hermano del causante **SEBASTIÁN CAMILO ARENAS SÁNCHEZ**, lo que se reflejaba directamente en sus posibilidades de aportar al sostenimiento

del hogar. Igualmente, obvió los pormenores enunciados en cuanto a las obligaciones que el compañero permanente de la demandante acordó atender con su salario en el grupo familiar de la actora, dado el compromiso que adujo mantenía con sus propios hijos y nietos.

Frente a este último se resalta que, a lo largo de la decisión estudiada en esta sede se observa cómo el Juzgador asumió una posición de fuerte crítica sobre la forma de distribución y asunción de las obligaciones del hogar, reprochando el poco compromiso que advertía en cabeza del señor **JOHN JAIRO SALAZAR GRANADA**, compañero permanente de la demandante, sin escatimar las vivencias y acuerdos en los que consintió la pareja, que estuvo conforme con la propuesta de hacer una vida en común, pero continuando cada uno atendiendo los compromisos familiares previos que tenían con sus propios descendientes, pues al iniciar su relación, cada uno tenía su propio grupo familiar, al que acordaron seguir apoyando cada uno con sus propios ingresos, máxime que ambos laboraban. Se destaca así que, pese a su ingreso regular, el señor SALAZAR GRANADA no destinaba este exclusivamente al hogar conformado con la demandante, pues el acuerdo de convivencia entre estos se dio bajo la idea de que cada uno continuaría sosteniendo a su propia familia, lo que encuentra su explicación en el hecho de que cada uno contaba con sus propios ingresos, así como un grupo familiar propio y numeroso, anterior a la relación, y que no tenían hijos en común.

Y aun de estimarse que el salario del señor SALAZAR GRANADA constituía un ingreso total para el grupo familiar de la actora, no se descarta que el aporte económico que le entregaba a esta el afiliado fallecido pudiera tenerse como intrascendente o inocuo, pues se tiene establecido que dicho aporte se destinaba a la compra de alimentos y para pagar parte del canon de arrendamiento, aspectos básicos de la subsistencia, que denotaban su trascendencia para la accionante, además que este alcanzaba casi la mitad del salario mínimo del afiliado fallecido.

Así entonces, el hecho de contar aquella con un empleo formal, no descarta la dependencia del causante, pues es apenas razonable estimar que el salario mínimo que devengaba la actora fuese insuficiente para atender sin afugas su subsistencia, aun incluyendo los aportes esporádicos de su otro hijo Sebastián, y los recursos que entregaba su compañero permanente John Jairo Salazar Granada.

Siendo esto así se destaca que, el hecho de existir otros ingresos en el seno del hogar de la ascendiente, no tiene la contundencia suficiente para desdibujar la dependencia económica respecto de su hijo fallecido, en tanto que lo reflejado probatoriamente, insiste la Corporación, es una realidad totalmente distinta, en vista de que los ingresos de la primera, incluso contando los aportes que en su momento pudieran hacer su otro hijo y compañero permanente, contrario a lo sostenido por el Juez de primer grado, no reflejan una suficiencia económica que hagan ver el aporte de su hijo fallecido como una mera colaboración inane, sin la connotación necesaria para estimar que su falta no tuviera la incidencia necesaria para afectar sus condiciones de subsistencia.

Así pues, lejos de evidenciarse la independencia económica de la demandante, lo expuesto refleja cómo, en efecto, el aporte económico efectuado por el joven tenía relevancia de cara a la satisfacción de las necesidades básicas de su progenitora, aspecto no advertido por el *A quo*, dado que al momento del juzgamiento, se itera, efectuó un análisis parcial de las circunstancias familiares y personales de la demandante, en la medida en que se redujo a resaltar aspectos de forma y lo que, en su criterio, debía ocurrir en cuanto a la vida de pareja, sin reparar en la manera como en efecto se desarrolló la convivencia en dicho hogar, el componente obligacional al interior de este, y el rol asumido por su integrantes, puntualmente.

Tal conclusión, se acompasa, en sentir de la Corporación, a la realidad enrostrada del material de prueba acopiado en el proceso, al igual que con la postura adoptada por la Sala

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, criterio mantenido en la actualidad, ya que al no exigirse la dependencia económica de manera total y absoluta, la progenitora del afiliado puede contar con otra fuente de ingresos, siempre y cuando no llegue a tener la suficiente solvencia económica para atender por sí misma sus necesidades, característica que no se advierte en el caso de marras, pues pese a los recursos obtenidos por la demandante, la ayuda proveída por el causante cobraba suma importancia en su condiciones de subsistencia, en virtud a que complementaba significativamente su sustento mensual y el de todo su grupo familiar.

Así mismo, la Sala recuerda que, al tenor de la definición que la Corte Constitucional le ha dado al mínimo vital y móvil, este no hace referencia al salario mínimo establecido por el gobierno nacional, sino que encierra una característica cualitativa, por lo que supone que cada uno viva de acuerdo con el estatus adquirido durante su vida (sentencia T-184/09). En este orden, como se dijo en precedencia, lo relevante es acreditar la incidencia que tenían los aportes efectuados por el causante para garantizar el sostenimiento económico de su progenitora, es decir, que fuera tan relevante que estaba subordinada a ello, tal como ocurre en este caso, donde lo aportado por el afiliado iba más allá de la ayuda esporádica proveniente de un buen hijo.

Bajo esa idea, una decisión diferente, conlleva a imponer a la parte activa la demostración de una carencia total de recursos, dejando de lado todo el precedente Jurisprudencial anotado en esta providencia, desde el cual las Altas Cortes han hecho un esfuerzo por enfatizar que la dependencia económica atiende, en esta clase de asuntos, más a la comprobación de la afectación de un mínimo existencial ante la ausencia de los recursos dejados de aportar por el causante, que a la inexistencia total de ingresos por parte de quien reclama como beneficiario.

Así las cosas, el análisis conjunto a las pruebas (Art. 60 CPLSS y 176 CGP), lleva a colegir que la demandante cumple los requisitos del literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su hijo, lo que da lugar a la revocatoria de la decisión de primera instancia, para en su lugar, acceder al reconocimiento de la prestación reivindicada.

La prestación se reconoce a partir del 4 de noviembre de 2017, fecha del deceso del afiliado (f. 16 Archivo 03 ED), y con derecho a 13 mesadas anuales, en atención a que la pensión se causa con posterioridad a la restricción de mesadas implantada con el Acto Legislativo 01 de 2005; sin que respecto de ninguna mesada hubiere operado la prescripción, dado que la actora interrumpió el fenómeno extintivo con la petición pensional elevada el 23 de enero de 2018 (f. 94 a 97 Archivo 03 ED, presentando la demanda originaria del presente proceso el 26 de julio de 2018 (f. 13 Archivo 03 ED), coligiéndose que no alcanzó a transcurrir el plazo trienal para la consolidación de la figura extintiva.

En cuanto al monto de la mesada pensional, es menester indicar que apegados a lo establecido en los artículos 21, 48 y 73 de la Ley 100 de 1993, efectuados los cálculos de rigor por parte de esta Corporación, con base en el promedio de lo cotizado durante toda la vida, se obtiene un IBL de \$853.282,37 que al aplicarse una tasa de reemplazo de 45%, para el 4 de noviembre de 2017, arroja una mesada pensional de **\$389.977,07** suma que inferior al SMLMV de la época – \$737.717-, debiendo reconocerse la prestación en el equivalente a UN (1) SMLMV, de conformidad con lo reglado en el artículo 35 de la Ley 100 de 1993.

Esbozado lo anterior, se obtiene que el retroactivo adeudado en favor de la demandante desde el 4 de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022 asciende a la suma de **\$59.209.538**, a cuyo valor se condenará a **PORVENIR S.A.**, y del que estará autorizada la entidad para descontar los aportes con destino al SGSSS, conforme lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

DESDE	HASTA	NÚMERO MESADAS	MESADA CALCULADA	RETROACTIVO
4/11/2017	31/12/2017	2,8	\$ 737.717,00	\$ 2.065.607,60
1/01/2018	31/12/2018	13	\$ 781.242,00	\$ 10.156.146,00
1/01/2019	31/12/2019	13	\$ 828.116,00	\$ 10.765.508,00
1/01/2020	31/12/2020	13	\$ 877.803,00	\$ 11.411.439,00
1/01/2021	31/12/2021	13	\$ 908.526,00	\$ 11.810.838,00
1/01/2022	31/12/2022	13	\$ 1.000.000,00	\$ 13.000.000,00
TOTAL RETROACTIVO				\$ 59.209.538,60

DE LOS INTERESES MORATORIOS

Frente a los intereses moratorios deprecados, hay que recordar que estos proceden una vez vence el plazo que por ley tiene la entidad de seguridad social para reconocer la prestación económica en este caso, por tratarse de una pensión de sobrevivientes, el término de gracia es de 2 meses por disposición expresa de la Ley 717 de 2001.

En ese sentido, la demandante efectuó la petición pensional del 23 de enero de 2018, por lo que **PORVENIR S.A.** tenía hasta el 23 de marzo de 2018 para reconocer la citada prestación, pero la negó mediante oficio del 14 de marzo de esa anualidad. En consecuencia, se condenará a la demandada al pago de los intereses de mora causados sobre las mesadas pensionales adeudadas, liquidados desde el 24 de marzo de 2018, y hasta que efectúe el pago de estas.

Lo anterior, atendiendo a que el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Laboral ha mantenido la tesis de que la finalidad de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, es la de afianzar el carácter vital de las pensiones disuadiendo las dilaciones en su trámite, y por ello tienen carácter resarcitorio y no sancionatorio en virtud del no pago oportuno de las mesadas pensionales, **sin hacer miramientos sobre actuaciones de buena o mala fe para su procedencia (SL662-2018).**

Con todo, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar, acceder al reconocimiento de la pensión de sobreviviente en favor de la demandante, de acuerdo con lo descrito en precedencia. Las **COSTAS** de ambas instancias están a cargo de **PORVENIR S.A.**, incluyendo como agencias en derecho de esta sede la suma equivalente a DOS (2) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia resuelve en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la Sentencia No. 310 del 29 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar:

PRIMERO: CONDENAR a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** a reconocer y pagar a la señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ** la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su hijo **ANDERSON JOHAN ARENAS SÁNCHEZ** a partir del **4 de noviembre de 2017**, en cuantía equivalente a **UN (1) SMLMV**, con derecho a 13 mesadas anuales, y sus respectivos incrementos de ley.


SEGUNDO: CONDENAR a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** a reconocer y pagar a la señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ**, la suma de **\$59.209.538** por concepto de retroactivo pensional causado entre el 4 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2022, suma de la cual se autoriza a la entidad para descontar lo correspondiente a los aportes con destino al SGSSS, sobre las mesadas ordinarias.


TERCERO: CONDENAR a **PORVENIR S.A** a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo reconocido en favor de la señora **ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ** a partir del 24 de marzo de 2018 hasta la fecha que se haga efectivo el pago.

CUARTO: Las **COSTAS** de ambas instancias están a cargo de **PORVENIR S.A.**, incluyendo como agencias en derecho de esta sede la suma equivalente a DOS (2) SMLMV.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

CÁLCULO PENSIÓN

PERIODOS (DD/MM/AA)		SALARIO	SBC	ÍNDICE		DÍAS DEL	SALARIO	IBL
DESDE	HASTA	COTIZADO		INICIAL	FINAL	PERIODO	INDEXADO	
1/01/2011	31/01/2011	196.387,00	1	105,240000	133,400000	30	248.936	3.849,53
1/02/2011	28/02/2011	536.000,00	1	105,240000	133,400000	30	679.422	10.506,53
1/03/2011	31/03/2011	620.000,00	1	105,240000	133,400000	30	785.899	12.153,08
1/04/2011	30/04/2011	397.000,00	1	105,240000	133,400000	21	503.229	5.447,32
1/06/2011	30/06/2011	428.480,00	1	105,240000	133,400000	24	543.132	6.719,16
1/07/2011	31/07/2011	89.267,00	1	105,240000	133,400000	5	113.153	291,63
1/09/2011	30/09/2011	145.000,00	1	105,240000	133,400000	8	183.799	757,93
1/10/2011	31/10/2011	571.000,00	1	105,240000	133,400000	30	723.788	11.192,59
1/11/2011	30/11/2011	652.000,00	1	105,240000	133,400000	30	826.461	12.780,33
1/12/2011	31/12/2011	373.000,00	1	105,240000	133,400000	15	472.807	3.655,72
1/06/2012	30/06/2012	367.000,00	1	109,160000	133,400000	19	448.496	4.392,48
1/07/2012	31/07/2012	738.000,00	1	109,160000	133,400000	30	901.880	13.946,59
1/08/2012	31/08/2012	982.000,00	1	109,160000	133,400000	30	1.200.062	18.557,66
1/09/2012	30/09/2012	833.000,00	1	109,160000	133,400000	30	1.017.975	15.741,89
1/10/2012	19/10/2012	367.000,00	1	109,160000	133,400000	19	448.496	4.392,48
20/10/2012	31/10/2012	13.133,00	1	109,160000	133,400000	1	16.049	8,27
1/01/2013	31/01/2013	118.000,00	1	111,820000	133,400000	6	140.773	435,38
1/02/2013	28/02/2013	314.400,00	1	111,820000	133,400000	16	375.076	3.093,41
1/03/2013	5/03/2013	98.250,00	1	111,820000	133,400000	5	117.211	302,09
6/03/2013	31/03/2013	19.750,00	1	111,820000	133,400000	5	23.562	60,73
1/04/2013	30/04/2013	719.000,00	1	111,820000	133,400000	30	857.759	13.264,31
1/05/2013	31/05/2013	589.500,00	1	111,820000	133,400000	30	703.267	10.875,26
1/06/2013	30/06/2013	118.000,00	1	111,820000	133,400000	6	140.773	435,38
1/08/2013	31/08/2013	251.000,00	1	111,820000	133,400000	11	299.440	1.697,86
1/09/2013	30/09/2013	761.000,00	1	111,820000	133,400000	30	907.864	14.039,14
1/10/2013	31/10/2013	668.000,00	1	111,820000	133,400000	30	796.916	12.323,45
1/11/2013	30/11/2013	432.000,00	1	111,820000	133,400000	15	515.371	3.984,83
1/12/2013	31/12/2013	413.000,00	1	111,820000	133,400000	20	492.704	5.079,43
1/01/2014	31/01/2014	868.000,00	1	113,980000	133,400000	30	1.015.891	15.709,65
1/02/2014	28/02/2014	732.000,00	1	113,980000	133,400000	30	856.719	13.248,23
1/03/2014	31/03/2014	616.000,00	1	113,980000	133,400000	30	720.955	11.148,78
1/04/2014	30/04/2014	759.000,00	1	113,980000	133,400000	30	888.319	13.736,89
1/05/2014	31/05/2014	819.000,00	1	113,980000	133,400000	30	958.542	14.822,81
1/06/2014	30/06/2014	739.000,00	1	113,980000	133,400000	30	864.911	13.374,92
1/07/2014	31/07/2014	682.000,00	1	113,980000	133,400000	30	798.200	12.343,29
1/08/2014	31/08/2014	807.000,00	1	113,980000	133,400000	30	944.497	14.605,63
1/09/2014	30/09/2014	724.000,00	1	113,980000	133,400000	30	847.356	13.103,44
1/10/2014	31/10/2014	726.000,00	1	113,980000	133,400000	30	849.696	13.139,64
1/11/2014	30/11/2014	636.000,00	1	113,980000	133,400000	30	744.362	11.510,76
1/12/2014	31/12/2014	799.000,00	1	113,980000	133,400000	30	935.134	14.460,84
1/01/2015	31/01/2015	857.000,00	1	118,150000	133,400000	30	967.616	14.963,13
1/02/2015	28/02/2015	709.000,00	1	118,150000	133,400000	30	800.513	12.379,07
1/03/2015	31/03/2015	837.000,00	1	118,150000	133,400000	30	945.034	14.613,93
1/04/2015	30/04/2015	873.000,00	1	118,150000	133,400000	30	985.681	15.242,49
1/05/2015	31/05/2015	795.000,00	1	118,150000	133,400000	30	897.613	13.880,62
1/06/2015	30/06/2015	850.000,00	1	118,150000	133,400000	30	959.712	14.840,91

1/07/2015	31/07/2015	1.015.000,00	1	118,150000	133,400000	30	1.146.009	17.721,79
1/08/2015	31/08/2015	817.000,00	1	118,150000	133,400000	30	922.453	14.264,73
1/09/2015	30/09/2015	1.061.000,00	1	118,150000	133,400000	30	1.197.947	18.524,95
1/10/2015	31/10/2015	1.007.000,00	1	118,150000	133,400000	30	1.136.977	17.582,11
1/11/2015	30/11/2015	951.000,00	1	118,150000	133,400000	30	1.073.749	16.604,36
1/12/2015	31/12/2015	886.000,00	1	118,150000	133,400000	30	1.000.359	15.469,47
1/01/2016	31/01/2016	951.000,00	1	126,150000	133,400000	30	1.005.655	15.551,37
1/02/2016	29/02/2016	805.000,00	1	126,150000	133,400000	30	851.264	13.163,88
1/03/2016	31/03/2016	986.000,00	1	126,150000	133,400000	30	1.042.667	16.123,71
1/04/2016	30/04/2016	931.000,00	1	126,150000	133,400000	30	984.506	15.224,32
1/05/2016	31/05/2016	906.000,00	1	126,150000	133,400000	30	958.069	14.815,50
1/06/2016	30/06/2016	912.000,00	1	126,150000	133,400000	30	964.414	14.913,62
1/07/2016	31/07/2016	828.000,00	1	126,150000	133,400000	30	875.586	13.539,99
1/08/2016	31/08/2016	796.000,00	1	126,150000	133,400000	30	841.747	13.016,71
1/09/2016	30/09/2016	771.000,00	1	126,150000	133,400000	30	815.310	12.607,89
1/10/2016	31/10/2016	796.000,00	1	126,150000	133,400000	30	841.747	13.016,71
1/11/2016	30/11/2016	1.000.000,00	1	126,150000	133,400000	30	1.057.471	16.352,65
1/12/2016	31/12/2016	880.000,00	1	126,150000	133,400000	30	930.575	14.390,33
1/01/2017	31/01/2017	850.000,00	1	133,400000	133,400000	30	850.000	13.144,33
1/02/2017	28/02/2017	769.000,00	1	133,400000	133,400000	30	769.000	11.891,75
1/03/2017	2/03/2017	51.267,00	1	133,400000	133,400000	2	51.267	52,85
3/03/2017	31/03/2017	839.626,00	1	133,400000	133,400000	28	839.626	12.118,31
1/04/2017	30/04/2017	880.049,00	1	133,400000	133,400000	30	880.049	13.609,01
1/05/2017	31/05/2017	883.116,00	1	133,400000	133,400000	30	883.116	13.656,43
1/06/2017	30/06/2017	1.037.799,00	1	133,400000	133,400000	30	1.037.799	16.048,44
1/07/2017	31/07/2017	1.122.122,00	1	133,400000	133,400000	30	1.122.122	17.352,40
1/08/2017	31/08/2017	929.368,00	1	133,400000	133,400000	30	929.368	14.371,67
1/09/2017	30/09/2017	837.376,00	1	133,400000	133,400000	30	837.376	12.949,11
1/10/2017	31/10/2017	865.824,00	1	133,400000	133,400000	30	865.824	13.389,03
1/11/2017	30/11/2017	2.282.145,00	1	133,400000	133,400000	4	2.282.145	4.705,45
TOTALES						1.940		853.282,37
TOTAL SEMANAS COTIZADAS						277,14		
TASA DE REEMPLAZO	45%			PENSION				383.977,07
SALARIO MÍNIMO	2.017			PENSIÓN MÍNIMA				737.717,00

CÁLCULO RETROACTIVO

DESDE	HASTA	NÚMERO MESADAS	MESADA CALCULADA	RETROACTIVO
4/11/2017	31/12/2017	2,8	\$ 737.717,00	\$ 2.065.607,60
1/01/2018	31/12/2018	13	\$ 781.242,00	\$ 10.156.146,00
1/01/2019	31/12/2019	13	\$ 828.116,00	\$ 10.765.508,00
1/01/2020	31/12/2020	13	\$ 877.803,00	\$ 11.411.439,00
1/01/2021	31/12/2021	13	\$ 908.526,00	\$ 11.810.838,00
1/01/2022	31/12/2022	13	\$ 1.000.000,00	\$ 13.000.000,00
TOTAL RETROACTIVO				\$ 59.209.538,60